

15ª SESION ORDINARIA. 28 DE JUNIO DE 1910

SUMARIO: Sanción de un proyecto, en revisión, sobre defensa social.

Señores Senadores

Avellaneda

Carbó

Carrillo

Funes

Garramuño

Godoy

González

Güemes

Gulñazú

Irigoyen

Láinez

Maciá

Malbrán

Mendoza

Olaechea y Alcorta

Ovejero

Peña

Pinto

Posse

Resoagli

Terán

Villanueva (E)

Virasoro

En Buenos Aires, á los veintiocho días del mes de junio de mil novecientos diez, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores senadores al margen consignados, con inasistencia de los señores senadores Civit (con licencia), Carreño, Echagüe, Soldati y Villanueva (B.) (con aviso), dice el

Sr. Presidente—Queda abierta la sesión con la presencia de diez y ocho señores senadores. Se va á dar lectura del acta de la anterior.

—Se lee y aprueba.

Sr. Presidente—Se va á dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario Ocampo—Proyecto de ley, en revisión, sobre defensa social.

—Entran al recinto los señores ministros del Poder Ejecutivo.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

El Poder Ejecutivo dándose cuenta de la gran expectativa nacional que reina y de la ansiedad pública, considera necesario que, á raíz de los sucesos conocidos, se arme á la autoridad de los medios represivos y preventivos que son necesarios para conjurar peligros presentes y futuros.

Por estos motivos el señor Presidente de la República envía su gabinete á esta sesión para que solicite de la honorable Cámara se sirva tratar sobre tablas este asunto, á fin de que se ponga en ejecución á la mayor brevedad posible. Pido al señor Presidente ponga en discusión esta moción.

Sr. Presidente—Desco saber si la moción que, á nombre del Poder Ejecutivo, acaba de hacer el señor Ministro del Interior, para que se trate sobre tablas el proyecto remitido por la honorable Cámara de Diputados, tiene el apoyo necesario.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Estando apoyada la moción, está en discusión. Se va á votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente—Se va á dar lectura en general al proyecto.

—Se lee:

Buenos Aires, junio 27 de 1910.

Al señor Presidente del Honorable Senado.

La honorable Cámara, que tengo el honor de presidir, ha sancionado en sesión de la fecha, el adjunto proyecto de ley, que paso á la revisión del honorable Senado, sobre defensa social. Dios guarde al señor Presidente.

E. CANTON.

A. Supeña,
Prosecretario.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

Artículo 1.º Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de inmigración, queda prohibida la entrada y admisión en el territorio argentino de las siguientes clases de extranjeros:

- a) Los que hayan sufrido condenas ó estén condenados por delitos comunes que, según las leyes argentinas, merezcan pena corporal;
- b) Los anarquistas y demás personas que profesan ó preconizan el ataque, por cualquier medio de fuerza ó violencia, contra los funcionarios públicos ó los gobiernos en general, ó contra las instituciones de la sociedad;
- c) Los que hayan sido expulsados de la República, mientras no se derogue la orden de expulsión.

Art. 2.º El empresario de transporte, capitán, agente, propietario ó consignatario de buque, que introduzca ó desembarque en la República, ó que intente, por sí ó por medio de otro, introducir de mala fe un extranjero comprendido en las prohibiciones del artículo 1.º, sufrirá la pena de multa de cuatrocientos á dos mil pesos moneda nacional por cada viaje en que se cometa la infracción, ó, en su defecto, seis á doce meses de arresto, sin perjuicio de reconducir á sus expensas á los extranjeros mencionados.

Art. 3.º El empresario de transporte, capitán, agente ó propietario de buque que omita las precauciones y requisitos conducentes al cumplimiento de esta ley, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, correrá con todos los gastos de transporte del deportado. Independientemente de esto, podrá imponérsele la mitad de las penas determinadas en el artículo anterior, á menos que resulte de las circunstancias del caso la imposibilidad material ó legal de haber prevenido ó impedido la infracción. En el caso del artículo anterior y del presente, podrá detenerse la salida del buque, mientras no se dé fianza real por las responsabilidades de la infracción.

Art. 4.º El Poder Ejecutivo ordenará la inmediata salida del país de todo extranjero que lograrse entrar á la República con violación de esta ley, ó que se halle comprendido por la ley 4144.

Art. 5.º Los extranjeros expulsados del territorio de la Nación en virtud de la ley 4144 ó de la presente, que retornen al territorio argentino sin previa autorización del Poder Ejecutivo, sufrirán la pena de tres á seis años de confinamiento en el sitio que determine el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de ser nuevamente expulsado después de cumplida la condena.

Art. 6.º Los extranjeros cuya entrada al territorio argentino se prohíbe por la presente ley, como también aquéllos á que se refiere la ley número 4144, no podrán obtener carta de ciudadanía argentina. Las cartas de ciudadanía, que se concediesen con violación de la presente ley, serán declaradas caducas por el juez fede-

ral más inmediato, á petición del ministerio fiscal, ó de cualquiera del pueblo.

CAPÍTULO II

Art. 7.º Queda prohibida toda asociación ó reunión de personas que tenga por objeto la propagación de las doctrinas anarquistas ó la preparación ó instigación á cometer hechos reprimidos por las leyes de la Nación, y la autoridad local procederá á la disolución de las que se hubiesen formado ó impedirá sus reuniones.

Art. 8.º Las sociedades, asociaciones, ó las personas que deseen celebrar una reunión pública, sea en locales cerrados ó al aire libre, deberán solicitar previamente autorización á la autoridad local, la que deberá prohibir dicha reunión si ella tuviere por objeto alguno de los propósitos enunciados en el artículo anterior.

Art. 9.º Si durante las reuniones que se celebren, con la previa autorización á que se refiere el artículo anterior, se produjesen alguno de los hechos que, conocidos con anterioridad, hubiesen motivado la prohibición de la reunión de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.º, la autoridad local ordenará la inmediata disolución de la reunión.

Los que no acatasen la orden de disolución, ó los que celebren una reunión prohibida, sufrirán la pena de arresto de 6 meses á 1 año. Los promotores ó cabeceillas sufrirán el máximo de la pena.

Art. 10. En las reuniones públicas, sea en locales cerrados ó al aire libre, no podrán usarse emblemas, estandartes ó banderas conocidas como características de las asociaciones prohibidas por el artículo 7.º de esta ley.

Art. 11. Los afectados por una prohibición de asociación ó reunión, podrán reclamar de ella ante el señor juez federal del lugar, quien, previa información sumaria, deberá confirmar ó revocar la prohibición.

CAPÍTULO III

Art. 12. El que verbalmente, por escrito, ó por impreso, ó por cualquier otro medio, haga públicamente la apología de un hecho ó del autor de un hecho que la ley prevé como delito, sufrirá la pena de 1 á 2 años de prisión.

Art. 13. El que, con el objeto ó la intención de cometer un delito contra las personas ó la propiedad, ó para infundir público temor, suscite tumultos ó público desorden, fabrique, transporte ó guarda en su casa ó en otro lugar dinamita ú otros explosivos de efectos parecidos, bombas, máquinas infernales ú otros instrumentos homicidas ó de estrago, ó bien substancias y materias destinadas á la fabricación ó composición de tales objetos, será castigado con la pena de 3 á 6 años de penitenciaría.

Art. 14. El que hace estallar ó coloca con ese fin dinamita ú otros explosivos de efectos parecidos, bombas, máquinas infernales ú otros instrumentos homicidas ó de estrago, con el solo efecto de infundir terror ó de suscitar tumulto ó desorden público, sufrirá la pena de 6 á 10 años de penitenciaría.

Si el hecho tiene lugar en sitio y tiempo de reunión pública, ó bien en tiempo de un peligro común, conmoción, calamidad ó desastre público, la pena será del máximo establecido en el párrafo anterior.

Art. 15. El que, por los medios indicados en el artículo anterior, intente destruir ó destruya, en todo ó en parte, un edificio ó construcción de cualquier naturaleza, sufrirá la pena de 10 á 15 años de presidio.

Si el hecho se comete en el asiento de asambleas políticas ó administrativas ó en otro edificio público destinado al uso público, en edificios habitados ó destinados á habitación, en talleres industriales ó almacenes, ó en depósitos de materias inflamables ó explosivas, la pena será de 15 á 20 años de presidio.

Si por causa del delito previsto en el presente y en el precedente artículo se ha puesto en peligro la vida de las personas, la pena será de presidio de 20 años hasta tiempo indeterminado.

Si se produjese la muerte de una ó más personas la pena será de muerte.

Art. 16. El que, por los medios indicados en el artículo 14, comete un hecho directo contra las personas, será castigado con presidio de 20 años á tiempo indeterminado.

Si se produjese la muerte de una ó más personas, la pena será de muerte.

Art. 17. Las personas asociadas para cometer delitos con materias explosivas serán castigadas con la pena de 6 á 10 años de penitenciaría.

Art. 18. El que fabrique, venda, transporte ó conserve en su casa, ó en otra parte, los objetos y materias indicadas en el artículo 13, sin permiso de la autoridad local, será castigado con la pena de 3 á 9 meses de arresto y multa de 500 á 2.000 pesos moneda nacional de curso legal.

Art. 19. El que verbalmente, por escrito ó por impreso, ó por cualquier otro medio, propague los procedimientos para fabricar bombas, máquinas infernales ú otros instrumentos análogos, ó para causar incendios ú otros estragos, será castigado con la pena de penitenciaría de 3 á 6 años.

Art. 20. El que, por los mismos medios indicados en el artículo anterior incite á cometer un delito previsto por la ley, será castigado:

Con prisión de 3 á 6 años, si se tratase de delito previsto con la pena de muerte.

Con prisión de 1 á 3 años, si se tratase de delito penado con presidio.

Con arresto de 6 meses á 1 año, si se tratase de delito penado con penitenciaría.

Con arresto de 3 á 6 meses, si se tratase de delito penado con prisión.

Con multa de 500 á 1000 pesos ó un día de arresto por cada 50 pesos de multa, si se tratase de delito penado con arresto.

Art. 21. El que, por los mismos medios indicados en el artículo 19, aconseje ó propague públicamente los medios para causar daños en las máquinas ó en la elaboración de productos, sufrirá la pena de arresto de uno á tres años de prisión.

Art. 22. El que venda, ponga en venta, imprima, distribuya, circule, exponga en lugares públicos ó reparta los impresos y las reproducciones mecánicas de que hablan los artículos 12, 19, 20 y 21, sufrirá la mitad de la

pena prevista en dichos artículos para el autor principal del hecho.

Art. 23. Cuando los delitos previstos en los artículos 12, 19, 20 y 21 se cometan por medio de la prensa diaria ó periódica, se aplicará el máximo de la pena.

Art. 24. Cuando los delitos previstos en los artículos 12, 19, 20 y 21, se cometan por impresos ó por cualquier otro artificio para reproducir signos figurativos, la policía procederá al secuestro del instrumento del delito y el correo prohibirá su circulación.

Art. 25. El que, por medio de insultos, amenazas ó violencias intentase inducir á una persona á tomar parte en una huelga ó boycott, será castigado con prisión de uno á tres años, siempre que el hecho producido no importe delito que tenga pena mayor.

Art. 26. El que, por los procedimientos indicados en el artículo 19, preconice el desconocimiento de la Constitución nacional, ó los que ofendan ó insulten á la bandera ó el escudo de la Nación, serán castigados con la pena de tres á seis años de penitenciaría.

Art. 27. Los reincidentes en los delitos previstos en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25 y 26, serán condenados á confinamiento en el punto que determine el Poder Ejecutivo, por un tiempo doble á la pena que correspondería á la primer condena.

Art. 28. Cuando los reos de los delitos á que se refieren los artículos citados en el artículo anterior, sean ciudadanos argentinos, naturales ó naturalizados, será un accesorio de la pena la pérdida de los derechos políticos y el retiro de la ciudadanía argentina.

Art. 29. Los cómplices y encubridores de los delitos comprendidos en esta ley serán castigados con la mitad de la pena establecida para los autores principales. Si la pena fuere la de muerte, los cómplices y encubridores serán castigados con la inmediata inferior.

Art. 30. Esta ley se aplicará sin distinción de sexo, salvo lo relativo á la pena de presidio.

Art. 31. No podrá ser aplicada la pena de muerte por los delitos á que se refiere la presente ley á los menores de 18 años.

No regirán, para la aplicación de la pena de muerte, en los casos previstos por esta ley, los incisos 8 y 9 del artículo 83 del Código Penal.

Art. 32. Para la aplicación de las penas se procederá en juicio sumario, sirviendo de cabeza del proceso el informe policial, debiendo permanecer detenido el procesado mientras dure el juicio. Son competentes para conocer y aplicar las penas que por esta ley se establecen, los jueces federales, no debiendo durar el proceso, que será verbal y actuado, más de diez días.

Art. 33. Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se opongan á la presente ley.

Art. 34. Comuníquese, etc.

E. CANTON.

A. Supeña,

Prosecretario.

Sr. Presidente—Está en discusión en general el proyecto cuya lectura acaba de hacerse.

Si ningún señor Senador hace uso de la palabra, se va á votar en general.

Sr. Láinez—Pido la palabra.

La Cámara ha consentido en que se trate este asunto sobre tablas; pero no creo que pueda votarse sin oír la palabra del Poder Ejecutivo, que ha interesado su sanción.

El asunto mismo, puede decirse que lo ignora totalmente el Senado, aún después de haber sido leído el proyecto, como probablemente lo ignorarán también los señores diputados que ayer lo han sancionado con toda urgencia. Este es un proyecto de ley sancionado ayer en la Cámara de Diputados en un conglomerado, puede decirse, sin coherencia y confuso, cuya cohesión le ha sido dada por tres señores diputados nombrados por la mesa de la Cámara. Este arreglo no ha sido pasado por una revisión, de modo que lo estamos tratando sin la suficiente prolijidad de examen. El asunto ha sido discutido con tal rapidez por la Cámara de Diputados, que sólo los que nos encontrábamos en la Casa ayer y tuvimos noticia de que iba á considerarse, ocurrimos, y nó en forma bastante cómoda para oír con la detención debida los fundamentos dados para su sanción; y deseo, para dar mi voto á favor ó en contra, conocer con todos sus detalles los fundamentos que tenga el Poder Ejecutivo para considerar necesaria su sanción inmediata.

Creo que esto no se puede negar en ninguna forma, aún para dar un poco de prestigio á una ley, que lo necesita, sobre todo, puesto que se considera el caso de urgencia. Se explicaría, cuando hubiéramos considerado todos detenidamente los antecedentes y fundamentos, que pudiéramos proceder con esta rapidez; pero, en este caso, no tenemos ni la opinión de la prensa, que ha sido sorprendida con esta sanción.

No se tratan en veinticuatro horas asuntos de esta trascendencia, sin procurarse los medios de formar exacto juicio.

Pido, pues, al señor Ministro del Interior que se sirva repetir ahora las razones que ayer dió ante la honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente—El señor Ministro del Interior tiene la palabra.

Sr. Ministro del Interior—El proyecto que tiene la honorable Cámara á su consideración es el resultado de varios

que se presentaron á la Cámara de Diputados. El primero fué el del Diputado señor Calvo, que se encuentra comprendido en el capítulo primero; el segundo el presentado por el Diputado doctor Ayarragaray y se encuentra comprendido en el que se discute; y el tercero por el Diputado doctor Meyer Pellegrini y figura en el capítulo tercero.

Todos estos proyectos se han publicado en los diarios de la Capital, y en el «Diario de Sesiones» de la Cámara de Diputados. Ellos fueron pasados al Ministerio del Interior, que hacía tiempo que se ocupaba de recoger los antecedentes necesarios de la Oficina del Trabajo, de la Policía, en consultas á los magistrados, á los jueces, á los fiscales y al Procurador General de la Nación, con el propósito de elaborar un proyecto en el sentido del indicado.

Sobre los proyectos referidos, el Ministro del Interior conferenció con sus colegas de Justicia y de Agricultura; porque, como la Cámara lo ha notado, estos proyectos contienen disposiciones respecto de la inmigración y también disposiciones referentes á materia penal.

Se siguió un largo estudio sobre este asunto por la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y por los miembros del Poder Ejecutivo. Al fin, el señor Diputado doctor Meyer Pellegrini hizo la refundición de todos estos proyectos, habiéndose puesto de acuerdo con el Ministro del Interior, y eso fué lo que sirvió de base á la discusión que empezó en la comisión. Como decía, estos proyectos han tenido la mayor publicidad posible: este folleto mismo, en que se imprimió este proyecto, fué repartido á todos los señores diputados, y entiendo que también á los señores senadores. Todos, pues, los que han concurrido á la Cámara de Diputados, al tomarse en consideración este proyecto, han tenido perfecto conocimiento de él, y el tiempo suficiente que deben tener siempre los hombres públicos que se ocupan de estas cosas tan fundamentales, para hacer un estudio completo y detenido.

Por otra parte, no se trata de inventar nada; todo esto está legislado en el mundo civilizado con penas más ó menos graves y con arreglo á las exigencias de cada país.

La misma enumeración de delitos que hace el capítulo tercero demuestra la preparación de los autores de este proyecto y cuánto interés han tomado, revisando las leyes de otros países y tomando lo que nos conviene á nosotros.

Esto en cuanto al conocimiento, á la difusión y al estudio del asunto.

Por esta razón se creyó preparada la Cámara de Diputados para abocar su conocimiento y lo tomó en consideración ayer, introduciendo en él algunas reformas, respecto de las cuales, en la discusión que se produjo, está demostrada también la preparación de todos los diputados que tomaron parte en ella.

Por lo que hace á la urgencia del despacho, yo he tenido motivo y ocasión de declarar otra vez en esta Cámara que creía que el país necesitaba poner en mano de la autoridad estas medidas preventivas y estas medidas represivas de que se ocupa el proyecto, y he afirmado que, en este sentido, nos encontramos desarmados: no podíamos suficientemente detener crímenes y delitos que á nuestra presencia se estaban fraguando, porque carecíamos de las facultades necesarias para detenerlos; y, aun para castigarlos.

Lo que ocurriré y ha ocurrido antes de ahora y que, como la Cámara sabe, ha impresionado tan hondamente á la opinión del país, es otra razón que hay que tener en cuenta para proceder con rapidez, con la rapidez que pedimos en este caso; porque, en efecto, es urgente aplicar estas medidas antes que este mal tome mayor proporción; y hay, á este respecto, una verdadera necesidad pública y una verdadera exigencia pública. El país necesita de esta protección, que es una protección social, una protección fundamental, necesaria y absoluta, que no se puede demorar.

Estas son las razones que ha tenido el señor Presidente de la República para interesarse en que este proyecto sea ley á la mayor brevedad posible; creo que si la Cámara lo aprueba habrá hecho una buena ley. No digo que ella será perfecta; nunca lo son esta clase de medidas; pero, el tiempo, la experiencia, las circunstancias y los fallos de los tribunales ya vendrán á mostrar las deficiencias y, entonces, se corregirán los defectos que existan.

No creo, pues, que sea perfecto el

proyecto, pero creo que es necesario, en las circunstancias actuales, para llevar al seno de las familias de este país, al seno de la sociedad, la tranquilidad y la seguridad que en estos momentos, más que en otros, se necesita.

No sé si habré satisfecho al señor Senador. Es cuanto tengo que decir por el momento.

Sr. Láinez—Pido la palabra.

El señor Ministro ha hecho una relación prolija de los casos en que fueron los proyectos presentados á la Cámara de Diputados é indicado quiénes fueron sus autores, y ha puesto de manifiesto la impresión de los sentimientos bajo los cuales el señor Ministro, en representación del Poder Ejecutivo, pedía que se tratara este proyecto.

Ha sido mi intención, mi deseo, pedir al señor Ministro lo que debe dar todo hombre de Estado en circunstancias tan solemnes: argumentos, razones, decisiones que prueben una vez por todas, que no basta la más extraordinaria de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo para traer la calma al país, aun cuando ya está armado de leyes generales y de leyes de excepción.

Cuando se trataba del proyecto sobre el estado de sitio, el señor Ministro adujo, no argumentos, sino impresiones y entonces tuve ocasión de decirle lo que voy á repetir ahora.

Hemos tenido, señor Presidente, hasta ahora, como la más eficaz de las defensas, el efecto moral del estado de sitio. Predijo, y lo repito ahora, después del hecho consumado, que el Poder Ejecutivo ha desacreditado todas las facultades que dicha ley le acuerda.

Los hechos producidos me dan toda la razón; no son leyes las que van á ayudarnos á salir de esta mala situación; se necesitan hombres para cumplirlas con la energía, el vigor y la previsión que exigen los momentos actuales. ¿Leyes? ¿Para qué? ¿Para aplicarlas á quién? Si los delincuentes se escapan de entre las manos, si la policía, reforzada últimamente con centenares ó miles de agentes más, con todos los recursos de la Nación, con la colaboración del público entero, no logra señalar la causa de este malestar, no logra tomar uno solo de sus agentes, y ante el poder inmenso de la Nación, doblado por las facultades extraordinarias que están fuera de la Consti-

tución, continúan burlándose de nosotros los agentes del crimen: á los que los discursos oficiales y los proyectos presentados á la Cámara de Diputados elevan hasta la categoría de adeptos de un ideal;—para mí, no son ellos sino criminales ordinarios.

El Poder Ejecutivo le debe á la Cámara de Senadores algo más que estas impresiones; le debe datos y me voy á permitir hacer algunas preguntas aprovechando la presencia del señor Ministro, que no tendrá inconveniente en escucharme; pues los considero indispensables para votar esta ley con algún asomo de razón concluyente, definitiva.

Deseo que el señor Ministro me diga: qué número de individuos han sido deportados en virtud de la Ley de Residencia, desde enero de 1910 hasta la fecha;—cuántos han sido detenidos y se encuentran actualmente á las órdenes de la policía y de los tribunales;—cuántas personas han sido detenidas ó trasladadas en uso de la facultad del estado de sitio;—cuántas han optado por salir del país;—cuántos naturales y naturalizados han sido arrestados;—en qué estado se encuentran las causas criminales de Karaschini y Rodewesky; del que puso la bomba en la Capilla del Carmen y del que asesinó cobardemente al coronel Falcón.

Después que el señor Ministro haya aclarado mis dudas respecto á todos estos puntos, lo acompañaré con toda decisión á votar la ley, porque creo que hay delitos nuevos que exigen leyes nuevas: pero no hay que improvisarlas; que conviene tratarlas con toda la serenidad con que se tratan estas cuestiones, con toda la entereza de hombres de gobierno, que no se dejan impresionar por el ambiente de hechos extraordinarios.

Espero la contestación del señor Ministro para continuar.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Es raro, señor Presidente, lo que ocurre respecto á la apreciación de esta facultad extraordinaria del estado de sitio. Cuántas apreciaciones se hacen en el público alrededor de esta facultad que se denomina extraordinaria y que según algunos está fuera de la Constitución, no obstante estar autorizada por ella! Todo el mundo cree que es una

panacea que va á curar todos los delitos, todos los desmanes y todos los hechos delictuosos que puedan cometer los habitantes del país; pero, señor Presidente, si se lee con alguna detención el artículo de la Constitución que autoriza al Presidente de la República á ejercer el estado de sitio en virtud de leyes del Congreso, y, cuando éste está clausurado, por acción propia, se verá que estas facultades se reducen á arrestar y detener á aquellas personas que se consideren peligrosas para el orden público, ó á alejarlas del sitio en que pueden ser causa de una perturbación. No puede desterrarlas, no puede confinarlas, no puede aplicarles ninguna pena. Esa es toda la facultad que confiere la ley de estado de sitio.

Estas facultades las ha ejercido el Poder Ejecutivo desde que la ley está en vigencia, y se encuentran detenidos en el departamento central de policía una porción de habitantes de este país que se han considerado peligrosos, y respecto de los cuales puedo decir á la Cámara que la policía ha constatado, por medio de sumarios é investigaciones especiales en cada caso, los hechos, las acciones y demás circunstancias que los han hecho pasibles de la acción de esta facultad que confiere el estado de sitio. Por lo demás, entre estas personas detenidas hay algunos argentinos, algunos naturalizados y algunos extranjeros. Es así, señor Presidente, cómo se ha producido el ejercicio de esta facultad que la ley acuerda al Poder Ejecutivo.

Respecto á la primera pregunta que hace el señor Senador, de qué cuántos extranjeros han sido deportados del país desde que se dictó la ley del estado de sitio...

Sr. Láinez—Desde el 1.º de enero de 1910.

Sr. Ministro del Interior—Desde el principio del año y en virtud de la ley 4144. Debo declarar, señor Presidente, que esta última ley es absolutamente deficiente é incompleta y es este proyecto el que la complementa.

En este momento podría asegurar al señor Senador que si me hubiera hecho con un poco de anticipación la pregunta, hubiera traído el nombre, apellido, clasificación y buque en que se ha deportado cada uno de estos individuos de que se trata, cosa que, por lo demás, no

interesa á la discusión y á la sanción de este proyecto.

Lo que puedo asegurar, señor Presidente, es que esta facultad del estado de sitio, como la de la Ley de Residencia, se ejercen como está en el deber de ejercerlas el Poder Ejecutivo.

Respecto de esta última ley ha habido muchas dificultades, entre otras, y muy fundamental, ésta: los individuos expulsados del país antes de ahora han sido embarcados y llevados á su país de origen, y muchas veces no han sido recibidos. Ha habido buques que han querido y pretendido dejarlos en varias partes, haciendo una especie de odisea algunos de estos individuos, porque los gobiernos, á cuya nacionalidad pertenecían, se negaban á recibirlos.

Para proceder á la expulsión de otros, ha sido necesario pedir permiso á naciones por donde debían pasar, ocasionando esto una serie de inconvenientes y dificultades. Y, aun cuando se ha llevado á efecto la medida, no han tardado mucho en volver al país, al extremo de que en una serie de años, que no podría precisar en este momento, ha habido individuos que han sido expulsados dos y tres veces y han vuelto otras tantas á la República. Entre éstos no pocos han obtenido la carta de ciudadanía, naturalmente con el propósito de substraerse á la Ley de Residencia.

Son estas deficiencias, señor Presidente, las que viene á remediar el proyecto actual en varios de sus artículos, con el objeto de poner en manos del Ejecutivo medios eficaces de proceder.

Respecto del segundo punto: de cuántas personas han sido detenidas ó trasladadas, diré que trasladadas no hay ninguna, y si mi memoria no me es infiel, porque no recuerdo en este momento la cifra exacta, hay alrededor de doscientas personas detenidas, entre las cuales hay, clasificadas propiamente de anarquistas, alrededor de ochenta y cinco. Estas cifras no son exactas, y no acusa ello defecto de preparación en el Ministro, sino que entendía que este dato de cuántos ciudadanos hay detenidos, y cuántos susceptibles de detenerse no interesaba á la discusión de la ley en particular, ni en general. Y si desciendo á estos detalles es nada más que por condescendencia y porque quiero

ser lo más amable posible con el señor Senador.

¿En qué manera, en qué forma y extensión puede ser cumplida la ley de estado de sitio? ¿En qué manera y en qué forma es posible cumplir, y hasta dónde se puede extender, y á quién puede ser aplicable la Ley de Residencia? Estas preguntas son difíciles de contestar, ó, más bien, no tienen contestación.

Este país, tan extenso, con todas sus puertas abiertas para el que quiera venir á habitarlo, con una cantidad inmensa de individuos que entran á él diariamente y que son absolutamente desconocidos para la policía, presenta muy serias dificultades para la vigilancia y para la aplicación de estas leyes.

Es muy difícil conocer esa gente, saber sus intenciones y propósitos, y de aquí nacen muchas dificultades; y no se puede aplicar la ley con toda la energía con que lo desea el señor Senador. Se aplica, en cuanto es posible, con la gente que comete actos que pueden ser apreciados por la policía, pero las intenciones no se pueden castigar.

Por otra parte, las facultades de la policía son limitadas en materia de reunión y asociación; no tiene intervención ninguna en ellas; y esta ley trata de dársela. Por eso decía que, si queremos poner remedio á estos males, tenemos urgencia de armar con todas estas medidas la acción del Poder Ejecutivo.

¿Qué otro dato desea el señor Senador?

Sr. Láinez—El referente al estado de los procesos.

Sr. Ministro del Interior—Respecto á éstos, mi honorable colega el Ministro de Justicia le informará debidamente.

Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública—Pido la palabra.

Precisamente, señor Presidente, en estos últimos días el Ministerio de Justicia se había preocupado, también, de averiguar el dato á que se refiere el señor Senador por Buenos Aires y puedo suministrarlo con las informaciones transmitidas por los agentes del ministerio público que han intervenido en los procesos.

El proceso seguido á Karaschina se encuentra terminado y en vísperas de dictarse sentencia; en el proceso seguido al asesino del coronel Falcón, no só-

lo se ha dictado la providencia de autos para sentencia, sino que también ésta se encuentra ya redactada y, según informes fidedignos, el día sábado se copiaba la sentencia; lo que quiere decir que hoy ó mañana se firmará y publicará.

Creo que estos datos satisfarán al señor Senador.

Sr. Láinez—Voy á continuar.

Sr. Presidente—Si es para aclarar ó rectificar, puede usar de la palabra el señor Senador.

Sr. Láinez—Sí, señor.

De las preguntas que he dirigido al Ministerio no he recibido contestación precisa, lo que quiere decir que el señor Ministro del Interior no ha tenido los datos que solicitaba y que considero fundamentales para justificar la urgencia de una legislación de tanta importancia. Esta debe ser apoyada en hechos concretos, como ser: hay tantos anarquistas catalogados: tenemos dentro del país tal cantidad que actúa; buscamos medios adecuados para combatirlos: hemos usado la facultad extraordinaria del estado de sitio en estas condiciones: tenemos tantos detenidos: hemos trasladado á otros puntos á tantos y podemos asegurar que está por el momento alejado el peligro de una posible perturbación.

Ninguna de esas cosas ha podido precisar el señor Ministro.

En una palabra, repetiré hoy lo que dije al discutirse el proyecto del estado de sitio, ó sea, que el Poder Ejecutivo no ha usado ninguna de las leyes eficaces que tiene á su disposición para tranquilizar el espíritu público; no ha usado, como ha podido hacerlo, la ley de estado de sitio, que le da facultades que seguramente no le dará esta legislación extraordinaria, y me temo que esta ley, enteramente rápida y violenta, que vamos á dar, sufra la consecuencia de esa especie de atonía que padece el Poder Ejecutivo cuando se trata de obrar rápida y enérgicamente.

Por consecuencia, del punto de vista de mis convicciones, creo que lo que necesita el país no es legislación, sino otra manera de cumplir las leyes ya sancionadas; y, si el espíritu público continúa inquieto, el Poder Ejecutivo sufre un gran error al creer que es por falta de leyes, pues la convicción pública es otra: no son leyes las que fal-

tan; es necesario hombres que las cumplan como deben ser cumplidas.

He dicho.

Sr. Maciá—Pido la palabra.

Yo no soy adversario de esta ley; soy su partidario. Creo que se necesitan medidas y creo que, planteada la batalla, hay que ganarla; pero lo que no creo, señor Presidente, es que el Senado esté en condiciones de tratar esta ley maduramente. Lo que no creo, señor Presidente, es que demos ante el mundo un espectáculo plausible con lo que estamos haciendo.

Estamos procediendo bajo el sentimiento de indignación por el hecho producido anteanoche en nuestro teatro más aristocrático. El movimiento de indignación es humano, es lógica la explosión del sentimiento público para pedir medidas en contra de los agresores. Esto es humano, es lógico; pero, señor Presidente, ese atentado no tiene más que una satisfacción y una vindicación: prender y castigar al delincuente.

Esa es la vindicación de ese hecho y las medidas para evitar otros semejantes son otra cuestión. Para evitar un nuevo escándalo hay que tomar serias medidas, pero en todas partes, cuando se trata de modificar la legislación del país, se procede en una forma madura, reflexiva, serena.

Sr. Godoy—¿Me permite? ¿Qué se discute?...

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor Senador por Entre Ríos. Está en discusión en general el proyecto de ley.

Sr. Maciá—No tengo ningún interés en hablar, si hay tanto apuro...

Sr. Presidente—La discusión no debe permitirse en forma dialogada. Puede continuar el señor Senador por Entre Ríos.

Sr. Godoy—Yo deseaba saber en qué forma...

Sr. Maciá—Repito que no tengo interés...

Sr. Presidente—Está en discusión en general el proyecto.

Sr. Maciá—Yo pido que se resuelva...

Sr. Presidente—¿Qué se va á resolver? Tendría que hacer moción...

Sr. Maciá—Pido que se declare libre el debate.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Está en consideración la moción previa: de si se declara libre el debate.

Sr. González—Creo que esa moción no debe ponerse á votación, porque nadie puede negarle al señor Senador el derecho que tiene de hablar.

Sr. Presidente—El señor Senador ha hecho moción para declarar libre el debate y debe ponerse á votación. El Senado ha resuelto tratar el asunto sobre tablas. La discusión está en general; y advierto á los señores senadores que no debo consentir la forma dialogada de discusión ni que hagan uso de la palabra cuantas veces quieran...

Sr. Maciá—¿Estamos en la discusión en general...

Sr. Presidente—Sí, señor Senador, y es el señor Senador quien tiene el uso de la palabra.

Sr. Maciá—Muy bien.

Decía, señor Presidente, que ante el problema que tenemos planteado, ante la batalla que se está dando, es necesario terminarla y es necesario triunfar; pero creo, señor Presidente, que el país, ante la explosión de un hecho, que no es nada más que un detalle dentro del problema planteado desde años anteriores, y para el porvenir, procediendo como si no tuviera medio alguno de defensa, no da ante el mundo un espectáculo plausible. Los países, cuando más necesidad tienen de tranquilidad es en estos momentos, cuando, en vez del espectáculo que se ha dado, debiera darse el de una nación que, como otras, pudiera contestar al atterado: «no te temo; puedo castigarte á tí y reprimir los que puedan sobrevenir».

Yo hubiera querido que en la República Argentina se hubiera producido una actitud semejante á la producida en el incidente que tal vez originó la elevación á la presidencia de la República de una personalidad francesa, cuando estalló en el recinto de la Cámara una bomba anarquista (y según se dice, señor Presidente, arrojada por un hombre que en nuestra República había desempeñado el cargo de profesor de filosofía) el presidente de la Cámara con toda la serenidad que este hecho re-

quiere, dominó el tumulto diciendo: «Señores diputados, la sesión va á continuarse». Nosotros, señor Presidente, hemos interrumpido todo para consagrarnos á la sanción de esta ley.

Hay en ella prescripciones que pueden considerarse oportunas, de momento, y contiene disposiciones para producir efecto en el porvenir, que lo mismo pueden sancionarse hoy que dentro de quince días; y, entonces, ¿por qué la sancionamos á tambor batiente en toda su extensión y en todos sus detalles?

Yo creo que debería en nosotros predominar la serenidad; creo que no deberíamos mirar este asunto precipitadamente; creo que deberíamos mirarlo en todas sus proyecciones y meditar sobre su alcance.

Como último informe de la situación obrera y sectaria, yo no tengo, señor Presidente, más elemento que este folleto que ha repartido la policía de la Capital, como la última palabra de la situación actual. En este informe he aprendido que la cuestión anarquista se ha complicado con la cuestión obrera; y no sólo con la cuestión obrera en sí, con independencia del socialismo, sino en su relación con éste, de tal modo, que es muy difícil establecer el deslinde de éste, hasta donde llega la acción de la una y donde va á concluir la de la otra. En este momento, yo he pensado si estas leyes no pueden ser perturbadoras de los otros problemas que nos interesan, por otros conceptos, y provocar á ir al anarquismo, elementos que hasta ahora no están en él, y pueden seguir un camino extraviado por medidas que erróneamente se les aplique. No podemos despertar este espíritu suspicaz que hay, con razón ó sin ella, en la masa obrera; no podemos despertar desconfianzas en los que están reclamando derechos que nosotros mismos consideramos legítimos, ni hacer nada que agrave la cuestión en lugar de disminuirla, so pretexto del anarquismo, que también ellos condenan.

Bajo estas fases, he considerado la cuestión, y, puesto que está á la resolución este asunto; puesto que el Senado queda en la triste situación de no tener siquiera donde encontrar los varios proyectos que en la Cámara de Diputados han sido presentados; pues-

to que el Senado tiene que juzgar en este caso, según el señor Ministro del Interior, con el conocimiento que le han dado las publicaciones del «Diario de Sesiones», que no les han llegado á los señores senadores sino accidentalmente, y por la prensa diaria, que ha podido publicar, pero no comentar, ni estudiar estos proyectos; en una palabra, puesto que el Senado está puesto fuera de todo procedimiento parlamentario, por la imposibilidad de que las comisiones estudien, aconsejen y den todos los antecedentes necesarios, no le queda, como único recurso para estudiar esta ley que se nos propone, sino la lectura de esos proyectos y del folleto que se nos ha repartido.

Ante esa situación, digo, yo quiero declarar que votaré, en cada caso, según la impresión del momento, ya que no soy civilista, ni criminalista, ni conozco las cuestiones de derecho; pero que lo haré lamentando que esta discusión no se haya postergado siquiera hasta la sesión del jueves, sin que nada me convenza de que el Poder Ejecutivo pierda ni gane en la eficacia de estas medidas, con tener esta ley esta noche ó pasado mañana.

Tristísimo sería para nosotros, tristísimo sería para el sentimiento de nuestro propio valer, si tuviéramos que confesar ante el mundo que, si no dictamos esta ley estamos en un grave conflicto. Lo que se ha dicho es cierto: el Poder Ejecutivo tiene á su disposición todos los medios de defensa hasta que esta ley sea sancionada. Yo no seré de los que crean que en estos momentos esta ley pueda seguir el camino de otros proyectos, que aguardan seis meses para una sanción definitiva, que puede darse en pocos días. Soy de los que creen que esta ley sería estudiada con toda la velocidad que el caso requiere, pero estudiada. No creo que una semana de demora en su sanción pueda perjudicar, en lo más mínimo, y, por el contrario, creo que sería conveniente para poder tenerla en condiciones que no causen ningún daño al orden público.

He de declarar, señor Presidente, que votaré en cada caso como crea en el momento y con todo el deseo de acertar, ya que no puedo excusarme de votar en lo que no conozco, porque no me es da-

do rehuir el reglamento; luego en esta ley no pongo ninguna ciencia, sino sólo el deber de cumplir con el reglamento. He dicho.

—Grandes aplausos.

Sr. Olacoea y Alcorta—Pido la palabra.

Las observaciones formuladas por los señores senadores por Buenos Aires y por Entre Ríos son hasta cierto punto extemporáneas, pues cuando se puso á votación la moción de tratar sobre tablas este proyecto, parece que hubiera sido realmente la oportunidad de hacerlas.

Debo manifestar cierta extrañeza respecto á la falta de preparación que aducen los senadores que han hablado en contra, y esta extrañeza se funda precisamente en el alto concepto que tengo formado de la intelectualidad de los señores senadores por Buenos Aires y Entre Ríos.

No es de hoy esta cuestión del anarquismo; está sobre el tapete desde hace años en la República Argentina, en cuyo seno se ha arraigado, debido en mucha parte, á la carencia de una legislación especial sobre la materia.

Hace seis meses, digo mal, desde noviembre, cuando se produjo ese hecho salvaje, la muerte del Jefe de Policía, Coronel Falcón, funcionario correctísimo—que fué un acontecimiento lamentado por todos los argentinos sin distinción de color político, porque se trataba de un funcionario que era una garantía para la sociedad—desde entonces estaba ya esta cuestión en tela de juicio. De manera que no es una cuestión que se pretenda resolver en un cuarto de hora, pues todos estamos más ó menos preparados, debo suponerlo, para resolver este problema y tratar este proyecto.

Me parece que, haciendo el debido honor á los ciudadanos que nos sentamos en este augusto recinto, debo suponer, que se han preocupado de estas cuestiones que afectan al orden social, y tan es así, que el mismo señor Senador por Buenos Aires reconocía al exponer sus ideas que había necesidad de crear una penalidad para un nuevo género de delitos especiales, relacionados con las manifestaciones del anarquismo.

En efecto, señor Presidente, todos los que hemos consagrado, aunque más no fuera que un cuarto de hora por día á la meditación de estos problemas, como el de la inmigración, sabemos cuánta importancia tiene en un país como el nuestro, llamado con razón «país de inmigración», la legislación especial sobre esta materia. Es conocido el pensamiento de Alberdi que decía «gobernar es poblar», por cuanto es evidente que tratándose de un país como el nuestro, dotado de vastos territorios, llamados á convertirse en centros de población y de riqueza, mediante las corrientes inmigratorias que traen el contingente de su brazo, de sus ideas y de su capital, precisa más una legislación previsora y limitativa, y no la que rige, que es evidentemente insuficiente y carece de las limitaciones racionales que siguen otras leyes tan sabias como las de Norte América, de 1907, cuya previsión y sentido práctico debemos imitar en lo que nos sea aplicable.

La Constitución Argentina es demasiado liberal en su legislación sobre los extranjeros, pues además de reconocerles todos los derechos del ciudadano, les permite entrar en su territorio sin imponerles limitaciones de ningún género, lo que es notoriamente inconveniente, á pesar de que se cree con ello facilitar la formación de la riqueza y el engrandecimiento del país.

Los «yankees», inspirados en las verdaderas conveniencias de su país, han dictado su sabia y previsora ley de 1907, la que debemos aplicar en sus limitaciones, prohibiendo la entrada al país de los que no traigan un contingente efectivo de ciencia, trabajo y capital.

Los argentinos, exageradamente liberales, aplicamos mal estas amplitudes de nuestra legislación fundamental, y es por eso que necesitamos hoy reformar la ley de la materia.

Ahora, en cuanto á parte penal de estos mismos delitos, de que con razón hacía méritos el señor Senador por Buenos Aires, está legislado en otras naciones y nosotros lo vamos á hacer por primera vez, pero esto no nos autoriza á decir que sea exacto, señor Presidente, lo aseverado por el distinguido Senador por Entre Ríos, de que nosotros estamos enteramente desprovistos, con una carencia absoluta de

nociones sobre esta materia, á tal punto, de que vamos á votar inconscientemente por una impresión; no lo creo así, tal vez en el calor de la improvisación, mi distinguido colega ha llegado á este extremo para producir más efecto para su tesis de su punto de vista. Pero yo creo, señor Presidente, haciendo el honor debido á la seriedad y á la noción de responsabilidad que tienen mis distinguidos colegas del ejercicio de sus funciones, que todos deben tener la preparación necesaria para ocuparse de asuntos de esta naturaleza.

Otro argumento que hace el señor Senador por Entre Ríos es que no conviene que estas leyes de carácter grave y complejo se traten y sancionen bajo la influencia producida por hechos dolorosos como el ocurrido en el teatro Colón.

Se dice, señor Presidente, que nuestro juicio puede extraviarse por las impresiones de un acontecimiento semejante, como si fuera ésta la primera vez que se produjeran en este país hechos de esta naturaleza; lo que no es exacto, por cuanto desde el suceso horroroso que dió por resultado la muerte trágica del coronel Falcón, hemos tenido ocasión de prepararnos en esta materia.

En cuanto al argumento formulado por los señores senadores por Buenos Aires y Entre Ríos, según el cual bastaban las leyes del estado de sitio y de residencia, que invisten de facultades extraordinarias al señor Presidente de la República, para poner coto á sucesos como los que lamentamos, debo manifestar, señor Presidente, que no son, en manera alguna, bastante esas leyes para salvaguardar á la sociedad de la acción disolvente del anarquismo; siendo, por otra parte, muy discutida la constitucionalidad de la ley de residencia.

En efecto, señor Presidente, la facultad de arrestar y trasladar á las personas, que usa el Poder Ejecutivo, no le da el medio eficaz de alejar definitivamente de nuestro país á los elementos anarquistas, por cuanto una vez sacados fuera de la República, vuelven á su seno, en mérito de no existir sanción alguna de carácter penal que les impida su reincorporación.

Porque desde que el anarquismo es una doctrina ó principio según el cual no reconoce ni ley, ni Dios, ni patria,

resulta, señor Presidente, que podríamos compararlos con los vándalos de la antigüedad, que destruían por destruir.

Y bien, señor Presidente, siendo, pues, insuficientes las leyes vigentes para reprimir con eficacia semejante elemento corrosivo y disolvente, desde que atacan las bases mismas sobre que reposa toda sociedad bien organizada, reconozco la necesidad indispensable de sancionar un proyecto como el que tenemos á consideración, que invista á la autoridad de los medios eficientes para combatir ese mal.

Sancionemos, pues, esta ley de defensa social, y si ella tiene errores, lo que no sería raro, dejemos á su aplicación y á la experiencia que las corrija; siendo nosotros mismos quienes podremos más tarde presentar los proyectos necesarios para corregir sus deficiencias.

No olvidemos, señor Presidente, que tratándose de hechos que comprometen el bienestar general de la sociedad, debemos consagrarle una atención preferente, recordando el pensamiento aquel: «*Salus Populi suprema lex*».

Sr. Maciá—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Me va á permitir el señor Senador que le haga una advertencia? La Cámara ha resuelto tratar sobre tablas el proyecto venido en revisión; y, como veo que los señores senadores se preocupan especialmente sobre si es ó no oportuno, á pesar de haberlo ya resuelto la Cámara afirmativamente, quiero saber si el señor Senador simplemente va á limitarse á rectificar.

Sr. Maciá—Yo no sé lo que voy á hacer, señor Presidente.

Sr. Presidente—Me atengo al reglamento.

Sr. Godoy—Había tenido razón cuando hice la pregunta.

Sr. Presidente—Tiene la palabra el señor Senador por Entre Ríos.

Sr. Maciá—Yo lo que voy á hacer es contestar á las alusiones que ha hecho el señor Senador por Santiago del Estero á mis opiniones y á repetir cuál es el objeto de las palabras que antes he pronunciado. Yo he dicho, como declaración, porque no puedo discutir lo que está votado, que votaré esta ley como pueda, poniendo en el acto, más de cumplimiento del reglamento que de ciencia; que no estoy preparado para votar, y que no comprendo cómo esta ley no

puede ser tan oportuna dentro de cuatro días como hoy. Nada más.

Como declaración personal, quiero decir que la inculpación de no estar preparado para discutir este asunto, no la acepto.

Sr. Olacoechea y Alcorta—Yo no he hecho absolutamente inculpación; el señor Senador interpreta mal mis palabras.

Sr. Maciá—Está implícita en sus palabras. Ha dicho que hace mucho tiempo que esta cuestión está planteada y discutida, y que debemos todos estar al corriente de ella.

Yo no he sido juez, no soy abogado, civilista ni criminalista, soy médico. Me he preocupado de esta cuestión como á mí me ha parecido que debía preocuparme, estudiándola en su fondo, en su origen y en sus complicaciones, por supuesto, sin dominarla por completo, porque es muy compleja, como cuestión mundial, no propiamente argentina, ya que no podremos jamás, aunque pretendamos hacer una legislación exclusiva, desligarnos de la vinculación que ella tiene con las demás naciones. Yo estudio en ese concepto esta ley. ¿Tiene algo de extraño que no conozca las prescripciones terminantes de una ley penal?

Esa tarea es para los abogados del Senado, para los que han sido jueces, que conocen el derecho criminal, pero yo necesito más tiempo para estudiarla y formar conciencia, que los senadores que dominan esa materia y pueden resolver la cuestión á primera vista.

En cuanto á lo que esa indicación pueda importar, de falta de estudio y labor, estoy tranquilo; tengo la conciencia de que cumplo mi deber y trabajo, y con eso me basta.

Me parece que esta ley, es una ley, dentro del conjunto de la cuestión, de simple detalle, es una ley particular de amplitud judicial, policial, de simple detalle en el cúmulo de problemas que esta cuestión implica, y yo desearía que los recursos policiales fueran más eficaces en el hecho, antes de ampliados en derecho. Desearía que se trataran con la tranquilidad y el reposo que demandan estas cuestiones, y que no tuviéramos estas energías, estos paroxismos, que nos están haciendo tratar esta cuestión arrebatadamente; que no la abandonemos durante años para que, cuando

surge un hecho criminal, tengamos espasmos de justicia: porque la justicia debe ser permanente y serena; y quisiera, en cuanto á la eficacia policial de esta ley, que se hubieran ejecutado las otras con otro criterio; hubiera querido, por ejemplo, que, como fenómeno y manifestación del pueblo de la República Argentina, no hubiéramos tenido sucesos como las manifestaciones de la juventud, tan nobles, tan espontáneas, tan patrióticas en los primeros días del Centenario y que después degeneraron hasta el punto de que, creyéndose suficientemente alentada, haya publicado proclamas como las que anoche han circulado por el pueblo, las que son más anarquistas que los documentos anarquistas mismos y que prueba que también, en una parte de la opinión, hay extravíos que es necesario tener en cuenta para exigir la tranquilidad necesaria.

Pero, contestando lo personal y deslindada bien mi situación, no tengo más que decir: que la ley se sancione, si es que así lo considera necesario la mayoría de mis colegas.

Sr. Olachea y Alcorta—Pido la palabra.

Sr. Presidente—No se la puedo conceder sino para rectificar.

Sr. Olachea y Alcorta—Como el señor Senador por Entre Ríos ha entendido mal mis palabras, necesito hacer una aclaración.

El alto concepto que tengo formado de la intelectualidad del señor Senador me ha autorizado á pensar que tuviera la preparación necesaria para tratar estas cuestiones, sin necesidad de poseer la ciencia de un civilista ó criminalista para abordarlas con criterio científico.

Pero el señor Senador que invoca su carácter de médico, no debe olvidar que desde hace quince ó veinte años actúa en la vida pública como miembro del Parlamento Nacional y como gobernador de provincia y habiendo desempeñado estas posiciones públicas debe suponerse que está iniciado en estas cuestiones.

En suma, no he tratado de hacerle cargos, y al contrario de una inculpación, lo que he hecho es un merecido elogio del señor Senador por su reconocida preparación como legislador.

Nada más.

Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública—Pido la palabra.

Tenía razón el señor Presidente cuando decía que se estaban haciendo discusiones alrededor de la oportunidad de esta ley, y yo agregaría alrededor también de la urgencia en dictarla; porque, en realidad, todos los argumentos que se han hecho tienden á establecer que no hay necesidad de sancionarla hoy.

Sr. Maciá — No puedo hacer argumentos de otra clase, porque no conozco mayores pormenores del proyecto.

Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública—El Poder Ejecutivo, señor Presidente, ha contado y cuenta actualmente para defender á la sociedad y al país contra los atentados anarquistas con la Ley de Residencia y con la ley de estado de sitio. El Poder Ejecutivo ha manifestado ya, en todas las formas, que la Ley de Residencia no es recurso suficiente para garantizar al país contra los extranjeros expulsados, porque carece de la sanción necesaria para castigar á los que la burlan volviendo al país después de la expulsión.

El señor Ministro del Interior ha manifestado hace un momento que la ley de estado de sitio no es tampoco un recurso suficiente y definitivo para salvar al país, desde que la única facultad que ella confiere al Poder Ejecutivo es la de detener ó trasladar á los habitantes, siempre que ellos no prefieran salir del territorio argentino, y esto sin contar con que las medidas que el estado de sitio permite tomar, no tienen eficacia permanente, son transitorias y duran sólo lo que dura la vigencia de la ley misma; una vez levantado, desaparece todo lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en materia de detención ó remoción de las personas.

Ahora bien, señor Presidente, la ley que el Poder Ejecutivo solicita en estos momentos es precisamente para salvar las deficiencias que ofrecen la Ley de Residencia y la de estado de sitio, ó sea una ley que establezca, con carácter de permanentes, los medios de castigar al expulsado que cometa ó intente cometer actos como los que de un tiempo á esta parte vienen perturbando la tranquilidad pública.

Por lo demás, señor Presidente, no disponemos actualmente del recurso ejemplarizador que da la rapidez en la

aplicación de la pena para evitar que los sectarios del anarquismo continúen realizando sus propósitos de atemorizar y aterrorizar á la sociedad. La rapidez en la aplicación de las penas no se produce como consecuencia del estado de sitio; ella depende de una ley del Congreso, que es el Código de Procedimientos en lo Criminal, código que es necesario modificar, á fin de que la sanción penal caiga sobre los culpables sin dilaciones y á la mayor brevedad posible después de cometido el delito.

Por lo demás, el señor Senador por Entre Ríos, hace el argumento de que no sabe qué va á ganar el Poder Ejecutivo con esta nueva ley. El Poder Ejecutivo no piensa ganar nada con ningún acto legislativo y si ha venido en este momento á solicitar la sanción de esta ley en debate, es porque tiene el pensamiento maduro y definitivo sobre ella; es porque tiene motivos fundados para suponer que el país y el Congreso han meditado también sobre los graves problemas que con ella tienen atingencia, y, por fin, porque se considera en el deber de responder á las exigencias manifiestas y terminantes de la opinión pública en estos momentos, á raíz del brutal atentado de anteanoche, que reclama la sanción de una ley represiva como el medio para tranquilizar á la sociedad, justamente atemorizada...

—Aplausos.

Por lo demás, señor Presidente, el Poder Ejecutivo ha empleado las facultades que le acuerda el estado de sitio con toda la intensidad y la energía que pone siempre en el cumplimiento de sus deberes constitucionales; y no pensando ni midiendo las responsabilidades que ello le comporte, porque acostumbra á cargar y cargará siempre con las que constitucionalmente le correspondan.

—¡Muy bien! Aplausos en la barra.

Sr. González—Pido la palabra.

No tengo el propósito de hacer un discurso ni entrar á un examen minucioso del proyecto: quiero solamente exponer en breves palabras las razones de mi voto, que daré favorable á la ley en general, por razones de lógica y de antece-

dentes. Este proyecto en su idea en general, coincide con disposiciones de leyes que alguna vez tuve ocasión de suscribir, y esta sola razón de lógica, repito, es la que me induce á votar en favor del proyecto en general.

Respecto de los artículos del proyecto, en la discusión en particular, votaré según la impresión que su lectura me produzca, porque recién él ha sido repartido y por más que uno pueda conocer esta materia, es imposible darse cuenta exacta de ciertos detalles. Aun los profesores más distinguidos necesitan, antes de dar una lección, repasar los libros y ordenar sus ideas.

Por estas razones, pues votaré el proyecto en general, reservándome en particular prestar mi voto á los artículos que crea convenientes.

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se va á votar en general el proyecto.

—Se vota y se aprueba.

Sr. Presidente—Está en discusión en particular.

—Se lee el artículo 1.º y se aprueba sin observación.

Sr. Virasoro—Hago indicación para que los artículos que no sean observados se den por aprobados.

Sr. Presidente—Si no hay observación, así se hará.

—Asentimiento.

—Se lee el artículo 2.º

Sr. Malbrán—Creo que sería conveniente introducir una modificación en este artículo. Me parece que debiera ser el capitán del buque sobre quien recaería la responsabilidad y no sobre el empresario ó propietarios de los vapores.

Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública—Pido la palabra.

No creo que tenga mayor eficacia la observación del señor Senador. La responsabilidad de la persona que de mala fe embarque un extranjero, contraviendo las disposiciones de este artículo, se puede establecer perfectamente por distintos medios de prueba, y la eficacia de esa responsabilidad está consignada en la última parte del artículo.

3.º: «no se permitirá la salida del buque, mientras no se haya cumplido la pena». De manera que no creo que haya razón para los temores que manifiesta el señor Senador.

Sr. Malbrán—No insisto entonces.

Sr. Presidente—¿Se da por satisfecho el señor Senador?

Sr. Malbrán—Sí, señor.

Sr. Presidente—Queda aprobado el artículo.

—Se aprueban los artículos 3.º hasta el 11 inclusive.

—Se lee el artículo 12 y dice el

Sr. Láinez—Pido la palabra.

Deseo que se dé lectura del artículo 32 de la Constitución Nacional.

—Se lee:

“El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta ó establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”

Sr. Láinez—Pido que se vote el artículo.

Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública—El Poder Ejecutivo se ha manifestado, en la sanción de esta ley ante la Cámara de Diputados, de acuerdo con todas las disposiciones contenidas en el capítulo tercero, inclusive la contenida en el artículo 12, y entiende que en ninguna forma se restringe la libertad de imprenta, en este caso, porque lo único que se pretende castigar es la comisión de delitos por medio de la imprenta.

Esa ha sido la razón que ha tenido el Poder Ejecutivo.

Sr. Láinez—Por la Constitución Federal no hay delitos de imprenta.

Sr. Ministro de Instrucción Pública—No delitos, sino la comisión de delitos por medio de la imprenta.

Sr. Láinez—No hay tales delitos de imprenta, por la Constitución, puesto que ésta no permite la restricción sobre ella ni que se la someta á la jurisdicción federal.

Sr. Ministro de Obras Públicas—Pido la palabra.

Parece de todo punto que no se trata de delitos de imprenta. La prescripción del artículo se refiere á toda clase de medios de publicidad, por los cuales se

puedan cometer los delitos previstos por esta ley.

Al decir el artículo que constituye delito cualquier forma de exteriorización ó publicidad de los delitos que prevé esta ley, como tales delitos, no dicta leyes para la prensa que la Constitución ha prohibido expresamente: se refiere á la prensa diaria ó periódica, y se refiere á leyes especiales que afectan los privilegios de la prensa periódica ó su libertad, y este artículo no restringe en lo mínimo la libertad de la imprenta, sino solamente para el caso que decía el señor Ministro de Justicia é Instrucción Pública: cuando se trata de cometer el delito por medio de la imprenta.

No ha asegurado la Constitución más que la libertad de la imprenta, pero no ha asegurado la impunidad de los periodistas, que pueden cometer delitos por medio de sus órganos, como cualquier otro individuo por otros recursos.

Creo que está perfectamente deslindada una y otra cosa y no hay lugar á confusión.

Sr. Presidente—Si ningún señor Senador hace uso de la palabra, se va á votar el artículo 12.

Sr. Láinez—Me atengo á lo que dice la Constitución Nacional.

Sr. Presidente—Se va á votar.

—Se vota y resulta afirmativa contra cuatro votos.

—Se lee el artículo 13.

—Se aprueban sin observación desde el artículo 13 hasta el 30 inclusive.

—Se lee el 31.

Sr. Maciá—¿Qué quiere decir eso? Los que conocemos el Código Penal...

Sr. Ministro de Justicia é Instrucción Pública—El artículo 83 del Código Penal establece las circunstancias atenuantes que los jueces tienen que tomar en cuenta al aplicar la pena; y los incisos 8 y 9 fijan, respectivamente, como circunstancias atenuantes, el hecho de que el proceso dure más de dos años sin culpa del procesado ó de su defensor cuando el delito merezca pena capital y haber corrido la mitad del tiempo necesario para la prescripción del delito. Por este artículo se suprimen estas dos causas atenuantes crea-

Junio 28 de 1910

CAMARA DE SENADORES

15.ª sesión ordinaria

das por el Código, y que quedarían subsistentes en el caso de que su caducidad no se estableciera expresamente en la ley.

Sr. Presidente—Si no hay otra observación, se va á votar.

Sr. Maciá—Yo no he hecho observación.

Sr. Presidente—Aprobado.

—Se aprueba el resto del proyecto.

Sr. Presidente—Queda sancionado el

proyecto, y se comunicará á la Cámara de Diputados.

—Grandes aplausos en la barra.

Sr. Peña—Hago moción para que se levante la sesión.

—Así se hace, siendo las 5 y 35 p. m.

ARTURO PARODY,
Director de Taquígrafos.